



Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones de desocupados a la burocracia asistencial del Estado. Argentina (2003-2008)¹

Luisina Perelmiter

Resumen

El artículo analiza el proceso de incorporación de miembros de organizaciones de desocupados al aparato del Estado en la Argentina reciente. Sobre la base de entrevistas y observaciones etnográficas, se analiza la narrativa que significa dicha incorporación, el entramado de relaciones en las que participan en el espacio estatal y las tensiones que derivan de su doble condición de militantes de base y representantes estatales. Se sugiere que este proceso reviste un interés teórico singular para explorar los procesos de construcción y disputa de las fronteras estatales. En ese sentido, se sostendrá que la mediación recíproca entre las prácticas militantes y la investidura estatal permite visibilizar el carácter inestable, y al mismo tiempo eficaz, de los mecanismos que establecen la especificidad de la autoridad estatal.

Palabras clave: movimientos sociales, Estado, micropolítica burocrática, asistencia estatal, Argentina.

Abstract

Unstable and effective boundaries. The induction of organizations of unemployed into the State's welfare bureaucracy. Argentina (2003-2008)

The induction process of members of organizations of unemployed into the apparatus of the State in Argentina in the recent past is analyzed. Drawing on interviews and

¹ Agradecemos los generosos comentarios de Mariana Heredia, Mariana Gené, Pamela Sosa, Cecilia Ferraudi Curto y Bruno Fornillo, a versiones anteriores de este artículo.

ethnographic observations, the narrative implied in such process, the fabric of relations in which the unemployed participate in government spaces, and the tensions that derive from their dual status as grass-roots militants and State representatives are discussed. It is suggested that this process is of unique theoretical interest in the exploration of the processes of construction of, and competition over State's boundaries. In that regard, the argument is that mutual mediation between militant practices and State endorsements reveals the unstable and yet effective nature of the mechanisms that establish the specificity of the authority of the State.

Keywords: social movements, State, bureaucratic micropolitics, State welfare assistance, Argentina.

Introducción

La emergencia de un movimiento social de desocupados de la envergadura que ha tenido en la Argentina ha sido objeto de diversos análisis y controversias: si son o no una expresión novedosa y perdurable de la acción colectiva; si manifiestan o no un tipo de identidad política diferente a la del peronismo; en fin, si sus vínculos con el Estado constituyen un círculo virtuoso a su expansión o más bien un límite a su autonomía. En 2003, la integración de varias de las denominadas organizaciones *piqueteras* a la coalición de gobierno liderada por el entonces Presidente Néstor Kirchner también ha suscitado interpretaciones encontradas. Para algunos, se expresaría aquí una respuesta gubernamental favorable a los sectores populares informales, que habrían logrado de este modo un lugar de mayor relevancia en la definición de la política pública (Gómez, 2006; Garay, 2007; Etchemendy y Garay, en prensa). Para otros, el mismo proceso consagraría un patrón de subordinación al Estado, cancelando su potencial de diferenciación respecto del peronismo y acentuando sus principales debilidades en el largo plazo (Svampa, 2008). Muchos de los aportes, sin embargo, mantienen posiciones más matizadas, enfatizando las diferencias en las tradiciones ideológicas de las diversas organizaciones y vinculando su relación con el gobierno kirchnerista a sus trayectorias previas (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; Fornillo, 2008; Cortés, 2009; Natalucci, 2010). El marco de discusión —y de valoración— en torno a este proceso, no obstante, se sitúa invariablemente en el problema de la autonomía del movimiento en un contexto favorable, en cierta medida, a su incorporación en las instituciones de la política oficial.

A pesar del ímpetu de estas controversias, las investigaciones rara vez reconstruyen la experiencia de gestión estatal de los miembros de los movimientos. Más aún, por lo general suelen dar por sentada la unidad y exterioridad del espacio estatal respecto del cual su *diferencia* debe ser asumida o

protegida. La importancia que se le acuerda al ingreso de organizaciones de desocupados al aparato del Estado convive así con un escaso conocimiento de los modos en que sus miembros experimentan el valor de sus nuevas prácticas, el entramado relacional del que participan al interior de las burocracias estatales y las formas en que tensionan o reconcilian su doble condición de militantes de base y representantes estatales. A partir del trabajo de campo realizado en la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN), ocupada mayormente por militantes de organizaciones *piqueteras*, nos proponemos aquí analizar algunos aspectos de este proceso.²

La pregunta de la que partimos en el caso argentino, pero que bien puede extenderse a otros países de América Latina que han atravesado procesos similares,³ no es tanto por los efectos que tiene esta nueva “asociación” sobre la autonomía de movimientos sociales que nunca habían ocupado posiciones de “oficialidad” en el escenario político y que, incluso, forjaron su identidad al calor de la confrontación con los poderes públicos. Aunque los procesos que analizaremos puedan aportar a dicha problemática, nuestro foco se sitúa en el propio espacio estatal: ¿qué capacidad tienen estos movimientos de resignificar la práctica estatal? Correlativamente, ¿qué poder tiene la investidura estatal, a su vez, de redefinir las prácticas de los militantes? En definitiva, ¿qué revela sobre el Estado esta imbricación, coyuntural quizás, entre militancia de base y burocracia estatal?

El análisis de la micropolítica que compone la trama íntima de la burocracia estatal constituye uno de los modos posibles de abordar estas preguntas. Esta opción conlleva una serie de supuestos teóricos que conviene explicitar. En primer lugar, como han sugerido varios autores, partimos de una noción desagregada de Estado (Gupta, 1995; Migdal, 2001; Haney, 2002; Soprano, 2008). Nos interesa conocer el funcionamiento de agencias estatales singu-

² El conjunto del trabajo de campo se realizó en tres áreas del MDSN (“Economía Social y Desarrollo Local”, “Seguridad Alimentaria” y “Organización y Capacitación Popular”) entre abril de 2006 y septiembre de 2008. En ese lapso se realizaron 80 entrevistas en profundidad a funcionarios intermedios y trabajadores estatales, y observaciones participantes de situaciones de trabajo de éstos últimos en distintas localidades del país. Los datos han sido analizados mediante el programa Atlas-Ti y a partir del método de generación de categorías y propiedades conceptuales mediante comparaciones sistemáticas propuesto por Glasser y Strauss (1967). Se utilizarán comillas para referir a categorías o expresiones nativas. Los nombres de las personas entrevistadas son ficticios.

³ La imbricación entre Estado y movimientos sociales en América Latina tiene significados diferentes según los países y periodos históricos. Comparar esas variaciones podría ser de gran utilidad para un abordaje de mayor alcance en torno a dicha articulación. Para una reflexión en ese sentido véase, por ejemplo, Álvarez y Hoetmer (2009).

lares, reconstruyendo las perspectivas y actividades de los actores que las ocupan, antes que realizar afirmaciones que aspiren a una generalidad que el propio objeto no tiene. En segundo lugar, asumimos una concepción relacional del espacio estatal anclada en su materialidad interna. Esto significa que dicho espacio no será tratado como una unidad discreta. Tampoco será reducido a un instrumento de dominio o a las voluntades de los actores que lo ocupan. Como sugiere Mitchell (1999:77), consideramos la elusividad de la frontera entre Estado y sociedad como un rasgo constitutivo del fenómeno y no como un problema de precisión conceptual. Abandonar la búsqueda de una definición de “Estado” que trace la frontera a priori no implica, como veremos, descartarla, sino documentarla en sus mecanismos reproductivos y ambigüedades. Por último, asumimos que el Estado y los modos de ejercer su autoridad no son independientes del significado que éste toma en contextos de interacción cultural e históricamente situados. Nuestro análisis, por tanto, le otorga relevancia a las relaciones y prácticas de significación que se recrean *en* los microcosmos de la burocracia estatal (Steinmetz, 1999).⁴

Comenzamos con una breve contextualización histórica de la relación entre el movimiento piquetero, el Estado y la política asistencial. Luego, analizamos la narrativa que significa el ingreso de organizaciones de desocupados al MDSN. Sostendremos que ésta se compone de dos dimensiones. Una, que consiste en el *reconocimiento* a las tareas sociales llevadas a cabo por las organizaciones durante los años noventa. Otra, que consiste en asignarles una *misión* específica: el de ser un puente entre centro y territorio. En el cuarto apartado, nos detenemos en el análisis de las tensiones que genera esta narrativa en las prácticas de gestión de políticas. Mostramos aquí que ejercer la autoridad estatal transforma las prácticas de los militantes, que ahora deben asumir las formas de la comunicación burocrático-legal: sistematizar, archivar, informar, certificar. En ese sentido, argumentaremos que la tensión entre la representación sectorial que los militantes ejercerían *en* el Estado, y la representación institucional que ejercerían *qua* Estado, visibiliza tanto la inestabilidad como la eficacia de las fronteras estatales. Terminamos con una breve reflexión en torno a las implicancias teóricas de esta paradoja.

1. Estado, política asistencial y movimiento piquetero

Como en el resto de América Latina, las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas en Argentina por un proceso de *asistencialización* de la po-

⁴ Para un desarrollo detallado de estos principios teóricos véase Perelmiter (2007).

lítica social. Como producto de las reformas liberales de la economía, Argentina experimentó una sucesión de transformaciones mayores en su estructura social. El aumento explosivo del desempleo y la pobreza inauguraron una etapa donde la intervención social del Estado se orientó, por un lado, a garantizar umbrales mínimos de subsistencia para los grupos sociales más desfavorecidos y, por el otro, a neutralizar potenciales estallidos sociales. Mientras los dispositivos de protección social asociados a la condición salarial se deterioraron o privatizaron, los programas sociales asistenciales se desplazaron de los márgenes al centro de la política social. Privatización, descentralización, focalización y control del conflicto fueron así los principios rectores de la política social neoliberal (Vilas, 1997; Lo Vuolo y Barbeito, 1998; Grassi, 2003; Andrenacci y Falappa, 2009).

En el marco de estas transformaciones, la matriz organizativa de grupos sociales de desempleados pobres se fue consolidando, desde mediados de los años noventa, a partir de la demanda de “trabajo” al Estado. Como ha sido analizado, tres factores relacionados le dieron al movimiento *piquetero* sus rasgos específicos (Schuster y Pereyra, 2001; Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004; Schuster *et al.*, 2005; Pereyra, Pérez y Schuster, 2008). En primer lugar, un método de protesta original, los cortes de rutas o *piquetes*. Al calor de la protesta (y la represión), los desocupados fueron forjando una identidad política diferenciada, redefiniendo las percepciones sociales sobre el desempleo y politizando la “cuestión social”. En segundo lugar, el arraigo territorial, construido a partir del trabajo social de base. La organización de redes locales de protección social (comedores comunitarios, campañas de alfabetización, postas sanitarias, cooperativas, entre otras iniciativas) ancló el movimiento en la vida cotidiana de los barrios pobres. Este arraigo, además, se estructuró en confrontación con la maquinaria peronista local, que vio así amenazado su monopolio sobre la sociabilidad política popular. Por último, el tercer factor se asoció al rol que asumieron las organizaciones en la mediación de la política asistencial. Las organizaciones de desocupados lograron expandirse, y algunas alcanzar escala nacional, a partir de la autogestión de planes de transferencia de ingresos. Luego del colapso de 2001-2002,⁵ el gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2002-2003) enfrentó la intensificación del ciclo de movilización *piquetera* con algunas modificaciones de política. Fundamentalmente, a través de la implementación de un programa de ingre-

⁵ En el marco de la crisis económica, movilizaciones masivas en diciembre de 2001 culminaron en la renuncia del entonces Presidente Fernando De la Rúa. Los niveles de desempleo y pobreza alcanzaron niveles inéditos entre 2001 y 2003. En 2002, por ejemplo, un 57.5% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza (INDEC).

sos masivo: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.⁶ Junto a municipios y organizaciones no gubernamentales, las organizaciones *piqueteras* tuvieron un rol importante en la administración local de este Plan, lo cual generó un afluente de recursos que, en un círculo virtuoso, consolidó su capacidad de crecimiento y movilización (Garay, 2007; Freytes Frey y Cross, 2007). También, sin embargo, estableció uno de los principales clivajes internos al movimiento y consolidó un patrón de dependencia estatal que, de ahí en adelante, se constituyó en su principal vulnerabilidad política.⁷

A pesar de estas iniciativas, el conflicto social no fue controlado sino hasta bien avanzado el gobierno de Néstor Kirchner. Su asunción a la Presidencia, en mayo de 2003, conllevó modificaciones importantes en el patrón de interacción entre movimiento piquetero y poder político.

Por un lado, el gobierno optó por cancelar la estrategia represiva e interpellar al movimiento reconociendo su protagonismo en la resistencia al neoliberalismo. Nuevos programas de viviendas y de apoyo a emprendimientos productivos, sumados a la iniciativa política del gobierno para poner en práctica reivindicaciones claves del campo opositor en los años noventa —por ejemplo, en materia de derechos humanos— terminaron por alinear a las organizaciones de desocupados de mayor envergadura (Biglieri y Perelló, 2007).⁸ Por otro lado, Kirchner movilizó a estos grupos como su nueva base de apoyo social. Más importante aún, el recurso a la protesta fue utilizado por el gobierno para confrontar a algunos actores claves del poder económico (Gómez, 2006; Natalucci, 2010; Etchemendy y Garay, en prensa). Por ejemplo, en marzo de 2005, varias organizaciones realizaron bloqueos simultáneos a estaciones de servicios de las empresas petroleras Shell, Esso y Repsol, en apoyo a las gestiones oficiales para regular el precio del gas. También realizaron manifestaciones contra grandes productores agropecuarios en el marco de iniciativas del gobierno para bajar el precio de la carne.⁹ Las confrontaciones callejeras más importantes, sin embargo, tuvieron lugar en 2008, en los primeros meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Duran-

⁶ Con fondos provenientes del Banco Mundial, este Plan tuvo una cobertura sin precedentes, rondando 2 millones de beneficiarios en abril de 2003. Para mayores detalles consultar Andrenacci *et al.* (2005).

⁷ Desde el comienzo, la relación entre movimiento piquetero y asistencia estatal fue dilemática. Esto se expresó, por ejemplo, en las controversias iniciales relativas a la posición de “aceptación” o “rechazo” frente a los “planes sociales”. Finalmente, la mayor parte de las organizaciones decidió aceptarlos (*cf.* Svampa y Pereyra, 2003:86 y ss.).

⁸ Las más importantes fueron *Barrios de Pie* y la *Federación Tierra y Vivienda*. Sobre las trayectorias de las distintas organizaciones luego de 2001, véase la compilación de Pereyra, Pérez y Schuster (2008).

⁹ Véase *La Nación*, 16-03-2006 y 22-03-2006.

te las masivas movilizaciones del sector rural contra el incremento de las retenciones a la renta agropecuaria, las organizaciones territoriales movilizaron a sus bases convirtiéndose en el símbolo de la manifestación pública pro-gobierno.¹⁰

Por último, el gobierno implementó estrategias de integración institucional de las organizaciones. A la apertura relativa de las listas electorales del *Frente para la Victoria*¹¹ a miembros del movimiento piquetero, se sumó el ofrecimiento de cargos públicos y áreas de gestión en el aparato estatal. Para 2006, aproximadamente 50 dirigentes piqueteros ocupaban posiciones de importancia en el Estado nacional y subnacional (Etchemendy y Garay, en prensa) y muchos de sus militantes pasaron a integrar las filas inferiores del personal estatal. Como parte de este proceso, a comienzos de 2006, el MDSN creó la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular (SOCP)¹² y se la “ofreció” a la organización piquetera *Barrios de Pie* (BP).¹³ En diciembre de 2008, sin embargo, BP decide “romper” con el gobierno, y sus dirigentes renuncian a sus cargos públicos. Los motivos de la ruptura fueron explicitados en declaraciones públicas, donde manifestaron que: “se ha desvirtuado la convocatoria a la conformación de una fuerza política plural, transformadora, defensora de los principios nacionales y populares (...) cuando vemos el avance del Partido Justicialista por sobre esta propuesta política”.¹⁴ Desde entonces, BP comenzó a reactivar el recurso a la movilización contra el gobierno.¹⁵

¹⁰ Véase *Clarín*, 25-03-2008 y *La Nación*, 06-06-2008.

¹¹ El *Frente para la Victoria* es la coalición electoral del gobierno de Néstor Kirchner, que incluye al sector kirchnerista del peronismo, sectores de la Unión Cívica Radical alineados con el gobierno nacional, y otros partidos menores.

¹² Decreto APN 551/2006 y Resolución MDSN 1573/2006.

¹³ En 2004, Jorge Ceballos, uno de los principales dirigentes de BP, ya había sido designado Director Nacional de Asistencia Comunitaria en el MDSN. En el marco de las movilizaciones de 2001-2002, BP se consolidó como una de las organizaciones de mayor anclaje territorial del movimiento *piquetero*. BP era parte de *Patria Libre*, organización partidaria, inscrita en la tradición de la izquierda “nacional-popular”, cuya historia comienza a fines de 1980. En 2006 se crea el *Movimiento Libres del Sur*, que reemplaza a *Patria Libre*, incluyendo a otros grupos de izquierda. Sobre la trayectoria de BP, incluyendo su participación en el gobierno kirchnerista, véase Fornillo (2008), Cortés (2009) y Natalucci (2010).

¹⁴ Véase *Patria Grande* (2008:2). Ceballos ya había renunciado a su cargo, como un “gesto político” frente a la imposibilidad de participar en las listas del *Frente para la Victoria* en las elecciones de octubre de 2007. En aquella oportunidad, no fue reemplazado y meses más tarde fue “re-nombrado”.

¹⁵ Por ejemplo, a fines de 2009, BP y otras organizaciones no oficialistas organizaron un campamento frente al edificio central del MDSN bajo la consigna “trabajo sin clientelismo”. El reclamo denunciaba los mecanismos discrecionales de distribución del plan de cooperativas

Respondiendo a la ruptura, el gobierno reforzó su alianza con las organizaciones territoriales del campo oficial. Por un lado, le “ofreció” la conducción de la SOCP al *Frente Transversal Nacional y Popular*. Por el otro, creó una nueva unidad, la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, donde designó como responsable al dirigente más importante de otra de las organizaciones afines, el *Movimiento Evita*. De este modo, a pesar de la salida de BP, la SOCP no modificó sustancialmente su composición interna y su posición en el entramado micropolítico del MDSN: siguió siendo la unidad *piquetera* del Ministerio.

Más allá de las peripecias de cada una de las organizaciones —cuyas divergencias, por cierto, son previas a 2003— la continuidad de la identidad intraburocrática de la SOCP expresa un proceso más amplio de inscripción de la militancia territorial en el aparato del Estado. Reconstruir el significado que asume el desplazamiento del *espacio político* de la práctica de los militantes no es menor para una reflexión en torno a la constitución y disputa de las fronteras estatales. La micropolítica burocrática en la que participan, las narrativas en las cuales construyen el valor de sus prácticas y las tensiones que su nueva investidura acarrea dice tanto de la “autonomía” de los movimientos sociales como de la “autonomía” de la autoridad estatal. En las páginas que siguen nos detendremos en el análisis de este proceso.

2. El ingreso como reconocimiento: subir a los movimientos

Cecilia, militante de BP, fue nombrada como funcionaria de la SOCP en 2006. Para Cecilia, y otros militantes, su incorporación al MDSN no implicó una transformación en el tipo de práctica que ya venían realizando. Según su perspectiva, su actividad continuaba el trabajo social a través del cual las organizaciones de desocupados habían “paralelizado” las funciones protectoras del Estado en los años noventa:

Del 2001 al 2004 hubo un proceso claro de paralización del Estado. Nosotros tomamos en nuestras manos resolver las necesidades más urgentes (...). Y... bueno, lo que nosotros nos propusimos fue instituir las prácticas de las organizaciones sociales en políticas públicas. (Cecilia, militante de BP, funcionaria de la SOCP, entrevista con la autora, 27-05-2008)

“Argentina Trabaja”, que había comenzado a implementarse unos meses antes. Véase *Clarín*, 02-12-2009 y *La Nación*, 17-12-2009.

Esta línea narrativa no era materia de construcción exclusiva de los militantes. El discurso institucional del MDSN también relataba el ingreso de las organizaciones y sus miembros como un corolario de sus actividades en pos “del cumplimiento de compromisos abandonados por el Estado” y la “resistencia activa a la vulneración de derechos”.¹⁶ En ese sentido, la *oficialización* aparecía como un acto de *reconocimiento* a dicha trayectoria.¹⁷ El programa *Promotores Territoriales para el Cambio Social* (PTCS), el único de la SOCP que tiene una visibilidad relevante,¹⁸ institucionalizaba esta narrativa. Su objetivo era la organización nacional de una red de “referentes” comunitarios que operaban como mecanismos de gestión y comunicación entre el nivel central y el local. Estos referentes, los *promotores* a los que alude el nombre del programa, coordinaban las denominadas *Unidades de Trabajo y Participación*. Las mismas eran espacios “multiactorales” orientados a la confección de “diagnósticos participativos” en el espacio barrial y a la organización de tareas asociadas a la implementación de las políticas estratégicas del MDSN —por ejemplo, la realización de operativos de asignación de pensiones asistenciales o censos de poblaciones específicas—. ¹⁹ La historia del programa comenzó en noviembre de 2004, en un encuentro de movimientos sociales de desocupados organizado por el gobierno en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Ese encuentro era relatado como el origen de la convocatoria que Alicia Kirchner,²⁰ responsable de la cartera, realizó al “campo de la militancia de base”:

El programa lo organiza Alicia [Kirchner]... A partir de que ve la necesidad de que, todos estos que estaban reclamando (...) sabían cómo se construía un

¹⁶ Véase MDSN (2007:275).

¹⁷ Utilizamos la noción de *reconocimiento* en un sentido similar al que utiliza Frederic (2004:134-136). La autora señala que este mecanismo es reversible. Es decir, no sólo involucra el reconocimiento de las cualidades de líderes y portavoces, sino el reconocimiento de los seguidores por parte de los dirigentes. Las evaluaciones que los dirigentes hacen de los seguidores moldean las cualidades necesarias para acceder al crecimiento político, instituyendo identidades o, en los términos que utilizamos en este trabajo, grupos y contra-grupos.

¹⁸ A diferencia de otras políticas implementadas desde la SOCP, las actividades de este programa suelen ser publicadas en la página Web del Ministerio y en un boletín electrónico mensual, “Desarrollo Social”, disponible en www.desarrollosocial.gov.ar

¹⁹ En mayo de 2009, el programa contaba con 2 553 promotores territoriales en el país (MDSN, 2009:172). Información adicional sobre el programa puede encontrarse en MDSN (2007:275-281).

²⁰ Alicia Kirchner, hermana del ex presidente Néstor Kirchner, ha conducido el MDSN durante la mayor parte del periodo considerado en este estudio. En diciembre de 2005 renuncia a su cargo al ser electa senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, pero en agosto de 2006 solicita una licencia en dicho cargo y re-assume en el MDSN.

proyecto desde afuera por haberlo gestionado anteriormente... sabían cómo se manejaba y cuáles eran los vericuetos y las ventanillas que no funcionaban por estar desde afuera, en el territorio. Y se los convocó para que, con esa mirada, desde adentro, corrijan todo lo que a vos te impedía... trabajar (...): “Bueno, muchachos, cada protesta debe tener una propuesta. ¿Qué es lo que proponen? vengan a laburar [trabajar] conmigo y vamos a modificar”. (Roberto, militante de *Militancia Federal*, facilitador nacional del PTCS, entrevista con la autora, 12-08-2008)

Tres rasgos del PTCS eran importantes. En primer lugar, el programa no distribuía recursos propios²¹ y los *promotores* no eran rentados, es decir, no eran empleados del MDSN. En línea con la narrativa de paralelización, éstos continuaban con su trabajo militante “de siempre”, el cual hubieran realizado “con o sin Ministerio”, sólo que ahora contaban con una instancia de organización nacional, con información sobre los recursos disponibles en el MDSN y con la autoridad institucional del Estado central. En segundo lugar, el equipo de agentes que coordinaba a los *promotores* —en la jerga del programa: los *facilitadores*— debían ser militantes de las distintas “fuerzas” que apoyaban al gobierno.²² Las credenciales militantes funcionaban como criterio de reclutamiento del programa: los *facilitadores* no podían desafiliarse políticamente y, si lo hacían, debían encontrar el modo de pertenecer a alguna “fuerza”.²³ Esta norma era más flexible para el caso de los *promotores*, pero en su mayoría mantenían vínculos con las organizaciones. Más aún, cada “fuerza” medía su participación en el programa por la cantidad de promotores que era capaz de aportar. Finalmente, el tercer rasgo se asociaba a su estructura jerárquica. Aunque el responsable del programa era un funcionario nombrado, el órgano decisorio estaba conformado por una “mesa de las organizaciones”, compuesta por un vocero de cada “fuerza”. Esta singular es-

²¹ Esto quiere decir que el programa no distribuye ningún bien o servicio, sino que realiza un trabajo de soporte “humano” a la implementación local de los programas estratégicos del MDSN administrados desde otras áreas.

²² Las “fuerzas” que participan del programa son organizaciones de desocupados cuya expansión está ligada a las movilizaciones de 2001-2002 (principalmente, la *Federación Tierra y Vivienda y Barrios de Pie*), y organizaciones consolidadas o surgidas a partir del gobierno de Néstor Kirchner (el *Movimiento Evita*, el *Frente Transversal Nacional y Popular* y *Militancia Federal*, entre otros grupos menores). Estas últimas agrupaciones reúnen a militantes que, por lo general, tienen una trayectoria política en el peronismo de matriz “nacional-popular”.

²³ Tanto es así que el programa mismo generaba organizaciones. Por ejemplo, *Militancia Federal* agrupa a militantes que ingresaron al programa “como” *Frente Para la Victoria*, a aquellos que se desvincularon de las organizaciones a través de las cuales ingresaron o que no tenían filiaciones orgánicas. Es decir, es una agrupación que reúne a los “suelos” y que, a diferencia del resto, surge ligada a la estructura del mismo programa.

estructura originaba una puja cotidiana entre las “fuerzas” por el control de cargos, recursos e información asociados al programa. Sin embargo, en relación a otros grupos de agentes ministeriales, los militantes reivindicaban una legitimidad diferencial, fundamentada en tres cualidades: *a)* particularismo colectivo, *b)* mística militante y *c)* saber territorial.

a. Particularismo colectivo y desinterés personal

En un conocido artículo sobre el campo estatal, Bourdieu (1994:16-17) propone que para comprender la dimensión simbólica del efecto Estado, habría que conocer el funcionamiento del microcosmos burocrático. En particular, habría que reconstruir el *trabajo de universalización* mediante el cual los agentes estatales adquieren potestad performativa sobre el “interés estatal” en cuanto “interés general”. Este trabajo, sugiere el autor, descansa en una ética del desinterés, de sacrificio del punto de vista individual en pos de un punto de vista societal que, por eso mismo, reclama para sí la neutralidad de sus fundamentos. Paradójicamente, el interés del agente estatal se juega en su capacidad de adosar a su práctica la norma del desinterés.

El MDSN es una burocracia estatal de características muy diferentes a las del Estado francés que inspira las reflexiones de Bourdieu. Sin embargo, la apelación a la norma del desinterés era un recurso de legitimación invariablemente invocado por los diferentes grupos de agentes que la habitaban.²⁴ La diferencia, en el caso de los militantes, era que este desinterés no se recreaba en el trabajo de universalización que unificaría al funcionariado estatal en cuanto tal. Por el contrario, lo que habilitaba el efecto de borramiento del interés individual era la invocación de lo que denominamos *particularismo colectivo*:

Nosotros creemos que hay que sostener las identidades (...). No es que yo bajo como Barrios de Pie o bajo como el Estado y me disfrazo del Estado. No. Yo soy Barrios de Pie en el Estado. O sea, nosotros somos una organización en el Estado. Igual que somos una organización dentro de la sociedad, disputando políticas (...). Cuando nos ofrecen un espacio en el Estado, no nos ofrecen personal-

²⁴ El “desinterés” es una disposición moral “disputada” por todos los grupos que hemos identificado dentro del MDSN. Lo que varía son sus fundamentos e indicadores. En un juego de espejos, para los agentes que se reconocen como “técnicos”, la prueba del “desinterés” está en la suma de su desafiliación partidaria, sus conocimientos expertos y sus convicciones políticas personales. Para un análisis del “desinterés” como regulador de distintas prácticas de “ayuda social”, véase Wilkis (2009).

mente. O sea, a veces, sí, se ofrece personalmente, porque ellos tienen... esa estructura... Entonces nosotros lo que hacemos es debatirlo colectivamente. (Beatriz, militante de BP, funcionaria de la SOCP, entrevista con la autora, 16-05-2008)

En efecto, los funcionarios y trabajadores de la SOCP enfatizaban que su actuación estatal suponía el ejercicio de una representación sectorial. En la medida que eran *portavoces* de organizaciones, sus decisiones eran el producto de un proceso de deliberación realizado en un ámbito “externo” al Estado. Pero lo importante, desde sus puntos de vista, era que sus “filia-ciones políticas” eran pruebas de que no poseían intereses personales. Este marco los diferenciaba de los agentes estatales que se insertaban en el Estado “individualmente”, motivados por intereses “egoístas” de carrera política o profesional. O aún de aquellos que sólo buscaban “trabajo”. Frente a sus contra-grupos —los “burócratas de carrera” o “los expertos de escritorio”— los militantes reivindicaban un desinterés que no se justificaba en la autoridad del saber científico o de oficio sino, precisamente, en los “intereses particula-res” de los grupos sociales que sus organizaciones representaban *en* el Estado. De este modo, el particularismo colectivo implicaba resistir el trabajo de universalización, deshacer la pretensión de exterioridad del Estado y asumirlo como “un espacio de disputas”. Superponer la representación sectorial y la estatal no contenía, desde ese punto de vista, ninguna contradicción.

b. Mística militante y contrato político

Los miembros de la SOCP afirmaban que su trabajo en el Estado no era un “trabajo formal”. Que a pesar de que surgía de un contrato laboral, el vínculo que establecía era político; que, más allá de que algunos poseían credenciales profesionales, el sentido de su relación con el Estado no era el despliegue de sus competencias técnicas. Para ellos, la idea que sintetizaba el sentido de sus prácticas era, precisamente, la de “militancia”. Esto significaba que se trabaja-ba “a convicción” y no “a reglamento”. “La diferencia —me decía Mónica, del *Frente Transversal Nacional y Popular*— es que nosotros no tenemos horarios ni días de trabajo” (entrevista con la autora, 12-08-2008). Quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche, trabajar durante los fines de semana o feriados, o estar dispuesto a costear personalmente gastos de gestión, eran pruebas de lo que para ellos constituía el sacrificio cotidiano de sí. De este modo, al desapego del “empleado público corriente”, oponían una ética militante que no sólo involucraba la toma activa de posiciones políticas sino

también una mayor eficiencia: “El tema de la militancia te permite agilizar... mucho más. Porque vos no estás cumpliendo formalmente un trabajo de una licenciada... Eso hace que vos... como que no quieras perder tiempo” (Cecilia, militante de BP, funcionaria SOCP, entrevista con la autora, 27-05-2008). En el marco de las representaciones negativas del trabajo estatal, la idea de militancia funcionaba como garantía de “compromiso” con lo público. A su vez, habilitaba un espacio simbólico de diferenciación intraburocrática, que procuraba responder a la sospecha de patronazgo de cargos al que suele asociarse el reclutamiento político de personal estatal.

Esta sospecha estaba efectivamente presente en el modo en que los miembros de la SOCP eran percibidos por agentes estatales que pertenecían a otras áreas del Ministerio. Para muchos de estos agentes, la creación de un “área piquetera” en el Estado obedecía, fundamentalmente, a una estrategia de control político del territorio por parte del gobierno central. Más aún, sus atributos eran descriptos negativamente, en relatos que enfatizaban su falta de competencias técnicas o de pericias para la gestión. En varias ocasiones, sin embargo, estos agentes también recurrían a la idea de militancia para significar su vínculo con el trabajo estatal. La “actitud militante” no se asociaba, para ellos, a la filiación política orgánica, sino a un plus personal de compromiso con el trabajo y con determinados contenidos ideológicos. De modo similar, aquellos agentes que formaban parte de la SOCP, pero no pertenecían a organizaciones, también cuestionaban el monopolio que los miembros de organizaciones pretendían ejercer sobre la cualidad militante. Estos agentes, por lo común con credenciales técnicas, habían sido reclutados en otras áreas del Ministerio y luego “pidieron el pase” a la SOCP motivados por “afinidades ideológicas” con los “movimientos sociales”. A pesar de esta convergencia, solían lamentar que su falta de pertenencias políticas fuera asociada a falta de compromisos ideológicos:

Porque a veces se cree que por no estar en ningún espacio de movimiento político partidario reconocido, no tenés una conciencia política (...) porque yo, como no estoy nucleada en ningún lado y soy “alguien” que solamente se dedica a ver un expediente y a firmarlo, no puedo observar otras cuestiones. (Mariana, trabajadora de la SOCP, entrevista con la autora, 30-05-2008)

Curiosamente, la pura técnica no era reivindicada como principio de autoridad por casi ningún agente estatal, independientemente de sus trayectorias y credenciales. La noción de militancia se constituía así en una ética contra-burocrática, cuyos contenidos y pruebas, sin embargo, eran variables y disputables.

c. Saber territorial y arraigo comunitario

La última propiedad que unificaba al conjunto de militantes era la reivindicación de un saber adquirido en la experiencia de proximidad geográfica con los sectores más desfavorecidos. Desde sus puntos de vista, haber estado “del otro lado” los proveía de un instrumento para prever la ineficiencia estatal. No era sólo la filiación política lo que definía su perfil como agentes estatales, sino el tipo de práctica —movimientista y comunitaria— que la recreaba, y en la que fundaban sus destrezas para la formulación de políticas:

La política social se construye con contenido; el contenido es la gente, los compañeros de los movimientos sociales. (...) Yo creo que vos podés saber mucho sobre políticas sociales [pero] si vos no tenés vinculación con la gente y no estuviste en territorio y... no pusiste los pies en el barro, difícilmente puedas hacer una política social. (Martín, militante de BP, trabajador de la SOCP, entrevista con la autora, 06-08-2008)

El “territorio”, como espacio de práctica militante, era también un espacio de adquisición de un saber empático, producido al calor del trabajo social de base. Este saber se oponía al saber tecnocrático, personificado en la figura del “experto” socializado en los circuitos académicos de la política social. La incorporación de un “saber local” a la gestión central se justificaba, de este modo, en torno a la necesidad de recomponer las bases epistémicas de la mirada estatal. Según Scott (1998), lo propio de la visión del Estado moderno es una mentalidad planificadora que toma prestada la legitimidad del conocimiento científico: universal, estandarizado, descontextualizado y codificado. A este tipo de conocimiento, al que denomina *techne*, opone lo que llama *mētis*: un saber local, de carácter práctico y contextual, adquirido y utilizado en la vida cotidiana, que no puede ser estandarizado. La dicotomía entre Estado y sociedad que, desde la perspectiva de Scott, es correlativa a la oposición entre *techne* y *mētis* es muy discutible en términos teóricos —¿acaso existe algún tipo de conocimiento que no esté codificado?— y dudosamente puede darse por sentada en el análisis histórico. Sin embargo, es el presupuesto de que dicha oposición existe lo que justifica, desde la propia mirada estatal, la implementación de políticas de “gestión participativa y descentralizada” y, más generalmente, la construcción de la “comunidad” como nuevo espacio de gobierno (Rose, 1996; Landau, 2009). Cuestiones que, a su vez, forman parte de la retórica *experta* de las políticas sociales y pueden encontrarse en el discurso de cualquiera de los organismos internacionales que participan del diseño y financiamiento de programas sociales (Álvarez Leguizamón, 2005).

En el proceso que aquí analizamos, la construcción del saber territorial como un atributo de la autoridad que ostentaban los militantes en el Estado, se sostenía sobre la base del mismo supuesto. Al constituirse en “conocedores” del territorio, los militantes eran llamados a officiar de traductores de lenguajes, tendiendo un puente o, como expresaba uno de los facilitadores, “haciendo de colchón” entre el nivel central y el local.

3. El ingreso como misión: bajar al Estado

En el apartado anterior analizamos cómo la incorporación de los “militantes movilizados” al Estado central era significada como un *acto de reconocimiento* a su trabajo social y político previo. En ese marco, los militantes reivindicaban ciertas cualidades propias que los diferenciaban del “agente estatal corriente” y que les conferían una legitimidad diferencial para el ejercicio de la autoridad asistencial del Estado. Pero existía una segunda narrativa institucional del ingreso, asociada ya no a las razones de la convocatoria sino al sentido de su misión *en* el Estado.

La misión consistía en “trasvasar el Ministerio” en el espacio local. Esta narrativa, en verdad, era uno de los componentes de una estrategia de innovación más general del MDSN tendiente a la construcción de una institucionalidad territorializada. El programa *Promotores* constituía sólo una de las columnas de esta estrategia. Junto con éste, se creó una red de filiales provinciales del MDSN (los *Centros de Referencia*) e instituciones locales de provisión de servicios sociales (los *Centros Integradores Comunitarios*).²⁵ En la misma línea, puede mencionarse la implementación del *Tren de Desarrollo Social y Sanitario*, que circula por el país como una filial itinerante del MDSN; y el Plan *Ahí, en el lugar*, destinado a la provisión de asistencia, servicios sociales y obras de infraestructura básica en localidades vulnerables. Además, el proyecto de arraigo local del MDSN involucró modificaciones en la estrategia de reclutamiento del personal central y en la dinámica de trabajo cotidiana. En ese sentido, por ejemplo, se incrementó dramáticamente el plantel de trabajadores sociales —agentes profesionales cuyas competencias se orientan al trabajo “de campo”— y se promovió un estilo de gestión ba-

²⁵ Según informantes de otras áreas del MDSN, este trípode institucional reemplazó a otra iniciativa inicial, la “Coordinación de Jefes Territoriales”. La misma estaba conformada por un grupo de agentes centrales “de elite” que tenían a cargo la centralización de las relaciones de las distintas áreas del MDSN con los gobiernos provinciales. Dicha Coordinación se desmanteló por una serie de conflictos internos al MDSN y también, según algunos de sus ex miembros, porque “hubo una opción por la militancia”.

sado en viajes constantes de los agentes centrales a distintas localidades del país.²⁶

En el marco de esta estrategia de transformación institucional, el rol de los militantes en el Estado se asentaba en las cualidades mencionadas en el apartado anterior. En tanto agentes estatales diferenciados, eran llamados a ejercer un contra-poder frente a dos “grupos” de actores: los “expertos de escritorio” y los “políticos locales”. En relación a los primeros, la misión de los militantes era pedagógica y se fundamentaba en el saber territorial que definía sus destrezas asistenciales. Mayor relevancia, no obstante, obtenía su misión en relación a los “políticos locales”. *Bajar al Estado* suponía interpolarlo en las relaciones que las elites políticas locales establecían con los receptores de asistencia. De acuerdo con esta narrativa, los militantes debían funcionar como una extensión difusa del MDSN, destinada a “controlar” el significado asociado a los recursos de asistencia, evitando apropiaciones manipulatorias:

Alicia [Kirchner] nos decía: “ustedes tienen que ser mis ojos en el territorio” (...). Cuando algún Ministro [provincial] o senador decía: “esas pensiones yo las tengo, yo se las doy”, nosotros íbamos por otro lado y decíamos: “Mire que esto es para todo el mundo, es universal”. (Beatriz, militante de BP, funcionaria SOCP, entrevista con la autora, 16-05-2008)

Esta tarea introyectaba en el Estado uno de los clivajes políticos a partir de los cuales se constituyó la identidad de las organizaciones de desocupados en su momento de formación: la confrontación con los gobiernos y aparatos partidarios locales. En efecto, la disputa que los militantes visualizaban como relevante en el MDSN no giraba, como para otros agentes estatales, en torno a conceptualizaciones alternativas de la política social —“focalizada” o “universal”; “asistencialista” o “promocional”—. Para éstos, lo que había que disputar eran los mecanismos de mediación local de las políticas del MDSN. Allí, consideraban, se definían los márgenes de autonomía de los sectores populares respecto de las redes clientelares de los gobiernos y partidos tradicionales y, extensivamente, la autonomía del proyecto kirchnerista respecto del Partido Justicialista:

Muchas veces los intendentes se encuentran con promotores que han sido opositores toda su vida (...) y les cuesta mucho reconocer que el promotor, hoy, actúa en nombre del Ministerio (...) algunos lo entienden y otros no, pero la

²⁶ Información adicional sobre la estrategia de territorialización del MDSN puede encontrarse en MDSN (2007:253-306). Para un análisis del modo en que esta estrategia reestructuró las demandas técnicas de la política asistencial véase Perelmiter (en prensa).

posibilidad de que el Estado garantice derechos descansa en la capacidad que tenga para trasvasarse en las organizaciones sociales de base. (Pedro, funcionario de la SOCP, entrevista con la autora, 29-06-2008)

Reponiendo una vieja articulación institucional de la tradición populista del peronismo, se trataba de disolver la distancia simbólica entre gobernantes y gobernados. Lo novedoso, si se quiere, es que el contenido popular del Estado pasaba en este caso por las características diferenciales de los actores que lo representaban institucionalmente. En tanto portavoces del “territorio”, los militantes se presentaban como “puentes” entre las oficinas centrales del MDSN y la comunidad de proximidad geográfica, entre la autoridad distante del Estado y la autoridad cercana del movimiento. Pero, ¿en qué medida los militantes podían permanecer como agentes estatales diferenciados? O, dicho de otro modo, ¿cómo se relacionaba su inscripción como militantes en el Estado con su actuación institucional *qua* Estado?

4. El “efecto” Estado y los límites de lo disputable

Roberto ingresó al PTCS como facilitador nacional en 2004. De larga trayectoria militante en el peronismo de izquierda, se incorporó al programa “como” *Frente para la Victoria* y luego se “agrupó” en *Militancia Federal*. Su facilidad de palabra y su experiencia política, según sus compañeros de “fuerza”, lo erigieron en vocero de esta organización al interior del programa. Vale la pena citar extensamente la descripción que realizaba de sus nuevas tareas:

Ahora, yo me siento parte del Estado... (...) Nosotros tenemos un combate para adentro... para modificar cosas del Estado... y para afuera... para hacerles entender a los compañeros del territorio, también, que no formamos parte del Estado, que no... nos fundimos ahí... Y que también hay una lógica que respetar. ¿Qué sé yo? Conseguir un proyecto significa traerme 3 presupuestos. Ahora, si vos no conseguís... alguna de las 3 facturas, se te complica completar el proyecto. Ahora, yo te tengo que hacer entender que si no es así, digo, yo sé que vos no vas a robar la *guita* [dinero] que yo te voy a bajar de esto... Ahora, si yo, esa lógica... la implemento a todo el país, todo el mundo me va a *currar* [robar]... Esta lógica hay que hacerla ¿no? (...) Sería utilizar mi... saber, en pos de esto. (...) Con lo que significa, sentarse con los compañeros, charlar con ellos, explicarles que este papel es importante... Es importante que vos llenés esta planilla, mandés tu informe, para que con tu informe, que es tu palabra, porque yo puedo decir: “Ramón me dijo...” O a Pedro, que es mi director: “¿Vos sabés Pedro? Ramón me dijo que tal cosa”. Y Pedro no va a ir a Alicia [Kirchner] y decirle que Roberto le

contó que Ramón dice... Es complejo... No; llevó el papel que escribió Ramón a Pedro y Pedro le va a tener que llevar a Alicia, el papel que le dio Ramón. ¿Entendés? ¿Cómo le hago entender a Ramón, que apenas sabe escribir, que me llene una planilla? Entonces, el compañero me dice: “Betito... ¿qué pasó? ¿Te transformaste?”... Textual, eh... Y no... mirá... hay que poder mostrar. ¿Cómo hacés para mostrar en un escritorio, a un funcionario que tiene poder, que lo único que lee es la letra y busca la coma y el acento... que Ramón dice que le falta tal cosa? Tiene que tener el papel. (Roberto, militante de *Militancia Federal*, facilitador nacional del PTCS, entrevista con la autora, 12-08-2008)

En las secciones precedentes decíamos que la narrativa del ingreso de militantes al MDSN les otorgaba una misión singular a sus prácticas estatales, lo cual permitía que emergieran como un “grupo” diferenciado. Y no sólo permitía, sino que exigía esa construcción. Para que los militantes fueran reconocidos y cumplieran su misión no “debían” ser una expresión indiferenciada de la autoridad estatal. Sin embargo, este mecanismo de mediación era reversible. Como puede verse en el testimonio de Roberto, su trabajo en el MDSN desmitificaba al Estado, transformaba su mirada sobre la burocracia asistencial, abría sus complejidades, vericuetos y problemas internos. Lo cual permitía hacer “razonable” lo que anteriormente parecía “caprichoso”.²⁷ Por eso mismo, los militantes entendían que, para *bajar al Estado*, debían traducir su actividad política a un nuevo lenguaje. Comunicar las “necesidades territoriales” a las áreas administrativas del Ministerio exigía la adopción de los métodos de inscripción y certificación burocráticos de la gestión asistencial: la confección de planillas, formularios e informes; el registro y contabilización sistemática de actividades; la certificación de atributos de “elegibilidad” para acceder a los recursos; la exigencia de presupuestos y rendiciones formales de gastos; en fin, el cumplimiento secuencial de un circuito engorroso de procedimientos. Así, la “burocracia” dejaba de ser una entidad oscura, para convertirse en una “lógica” a comprender y dominar.²⁸

Los militantes confrontaban cotidianamente con las estructuras administrativas del Ministerio, que asociaban al “Estado neoliberal” preparado sólo para “transferir” recursos a “las provincias y municipios”, o a las “grandes

²⁷ Este efecto de desmitificación del gobierno es identificado y analizado por Landau (2008:159 y ss.) en relación a los programas de “promoción de la participación ciudadana” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

²⁸ La importancia que en el PTCS se asignaba a la socialización burocrática se expresaba en talleres organizados por cada “fuerza” de modo de capacitar a los militantes en la serie de procedimientos que su trabajo “de siempre” ahora requería: cómo sistematizar sus actividades, cómo elevar informes estandarizados, cómo tramitar el pedido de recursos dentro del MDSN, entre otros.

organizaciones” que cuentan con equipos técnicos “entrenados en esos procedimientos”. A pesar de este discurso crítico, asumían que sus prácticas debían adaptarse a la institucionalidad estatal, que el saber procedimental “no es sólo ‘trabajo burocrático’, es una herramienta que te permite entrar, reclamar, entender (...) tener la posibilidad de por lo menos hacer el contacto, saber quién es el que te puede ayudar” (Analia, militante de la *Federación Tierra y Vivienda*, facilitadora nacional PTCS, entrevista con la autora, 22-08-2008). En ese sentido, la eficiencia que presuntamente aportaban a través de la mística militante encontraba su límite en la dificultad para aprender y transmitir hacia abajo el valor de adaptar sus prácticas a los requerimientos burocrático-legales de la gestión pública. En el PTCS, esta tensión se manifestaba en las relaciones entre los facilitadores nacionales y los facilitadores provinciales y promotores. Para los primeros, los militantes ajenos a la vida burocrática del MDSN no advertían que debían cumplir con estos procedimientos, como parte de la disputa que mantenían con otros actores en la dinámica interna del Ministerio:

Criticamos mucho desde el imaginario... lo que es la gestión, y después cuesta (...). Les pedís un informe semanal de lo que están haciendo... “¡Ah, no!... ¿Para qué querés esto? —te dicen— eso es una huevada, eso es burocracia”. (...) Hay una contradicción de los militantes, porque, por un lado, queremos los recursos ya porque conocemos la urgencia del territorio. Pero, por otro lado, tampoco... quiero mandarte una planilla. (...) Si vos no me ponés [lo que hiciste] en una hojita, en un papel, aunque sea escrito a mano, yo no puedo hacer nada. (Graciela, militante del *Frente Nacional Campesino*, facilitadora nacional del PTCS, entrevista con la autora, 29-08-2008)

Utilizando las categorías de Latour (2008) podríamos decir que los militantes constituyen un agente del *actor-red* involucrado en la asistencia estatal y que, como ha sido abundantemente analizado, esto no es una novedad del periodo que se inicia en 2003. Para el autor, habría que asumir con mayor seriedad el clásico principio relacional de la sociología según el cual la fuente de la acción no es el agente, sino los movimientos asociativos entre agentes. El actor, en verdad, es la red. Las asociaciones entre agentes suponen relaciones de fuerzas donde algunos logran *aliar* a otros e imponer sus propias traducciones de las relaciones. Por tanto, es importante identificar las formas de las relaciones asociativas y distinguir entre aquellas que median significados, transformándolos, y aquellas que los intermedian, transportándolos (Latour, 2008:88-89).

Dado que su misión era transformar las prácticas estatales, los militantes debían ser, al igual que antes de su ingreso al MDSN, *mediadores* y no me-

ros *intermediarios* de la asistencia estatal. Según las categorías que estructuraban la identidad de los grupos y contra-grupos del MDSN, los intermediarios serían “los de carrera y estructurados”, los que “se toman esto como un trabajo formal”. Sin embargo, las prácticas de los militantes eran, también, *mediadas* por el Ministerio, cuya lógica y lenguajes tenían que “hacerle entender” a “los compañeros”. De este modo, la investidura estatal transformaba a los militantes. Esto resultaba particularmente manifiesto en dos dimensiones.

En primer lugar, ocupar una posición en el Estado central implica asumir una perspectiva *translocal*. La categoría de escala que orienta las prácticas de los agentes estatales centrales, en Argentina y en cualquier parte, supone el ejercicio de una mirada desarraigada de los contextos locales de interacción: *el territorio nacional son todos los lugares del país y ninguno en particular* (Gupta, 1995). Esta posición modificaba el contenido de una de las cualidades que definían a los militantes como agentes estatales diferenciados: el saber territorial. En el periodo anterior, la autogestión de recursos asistenciales por parte de los movimientos de desocupados habilitaba un proceso de resignificación política basado en su anclaje en las comunidades locales, las cuales asumían contenidos concretos: un barrio o ciudad con su historia, sus actores, sus conflictos. Ahora, el saber territorial se vuelve una cualidad abstracta. Vale la pena enfatizar este punto: un facilitador nacional que había militado y vivido históricamente en un municipio del conurbano bonaerense, por ejemplo, devenía el responsable de una región (el Nordeste, la Patagonia, o cualquier otra) que no coincidía con su lugar de residencia-militancia. Los militantes, en ese sentido, no “subían” al Estado el contenido de su “saber local”, sino la forma de ese saber, que de esta manera se universalizaba y, en consecuencia, se negaba en su atributo contextual.

En segundo lugar, personificar al Estado central trae consigo una serie de signos de jerarquía y expectativas independientes de las cualidades extra-estatales de aquellos que ejercen su autoridad. En general, la experiencia de “bajada” de los agentes centrales al territorio era relatada de modos similares, no sólo por los miembros de la SOCP. Por un lado, el desplazamiento al terreno suscitaba un efecto jerarquizante mediante el cual los agentes inferiores del Ministerio se reunían con funcionarios importantes, abrían puertas que estaban cerradas, generaban acuerdos o lograban nuevos balances políticos. La presencia de un agente del MDSN en territorio, independientemente de su cargo, provocaba un “revuelo” porque era un evento que contenía una promesa de acceso a recursos e influencia y, más aún, porque la sola presencia de un representante del Estado nacional suponía ya un logro político para los actores locales. Por eso, eran buscados en el aeropuerto o las estaciones de

autobús, les conseguían hoteles, los invitaban con comidas, les organizaban eventos y homenajes. Por otro lado, sin embargo, los rituales de recibimiento también expresaban expectativas de respuesta. La frustración repetida de esas expectativas hacía de los agentes centrales receptores indiferenciados de quejas y demandas en relación a los recursos que distribuía el MDSN. Así, los agentes tenían que explicar por qué los “trámites” estaban demorados, prometer que se iban a ocupar de “encontrar y hacer caminar” las gestiones o de averiguar qué “papel” hacía todavía falta para concretar las asignaciones. En definitiva, tenían que “responder” por el Ministerio.

Durante nuestras observaciones de campo, en la SOCP y en otras áreas, advertimos que esta dinámica se repetía con independencia de los grupos de pertenencia de los agentes estatales. Cualquier agente del MDSN era interpellado como una fuente de información y respuesta respecto del conjunto de políticas asistenciales centrales, incluso las que se implementaban desde otros Ministerios. Frente a este tipo de interacción los agentes carecían de información o de recursos para canalizar demandas. La presencia eventual y discontinua de un agente estatal por definición “distante” hacía que la resolución de estas situaciones quedara, por lo general, pendiente. En el caso de los militantes, este “efecto boomerang” era más intenso para aquellos que actuaban como *facilitadores provinciales* y *promotores* en nombre del MDSN pero cuya inserción seguía siendo local. En los relatos que los agentes hacían del trabajo de los promotores aparecía un patrón: cuando los militantes se transformaban en “agentes” del MDSN se fortalecían políticamente, lo cual permitía que fueran legitimados como interlocutores de los gobiernos locales y recibidos en lugares donde antes eran rechazados. Este fortalecimiento, a su vez, producía una expansión de las expectativas respecto de su capacidad de resolución de problemas en los barrios. Al no poder responder a estas expectativas, la promesa de “acceso” al centro se frustraba.²⁹ En consecuencia, devenían receptores de las demandas que antes contribuían a formular: intermediarios y ya no mediadores de la política asistencial:

Los tiempos del ministerio no tienen una mierda que ver con los tiempos de la gente. Ésa es la realidad. Entonces, a nosotros ¿qué nos pasa en el programa? “Y, va a salir tal cosa...” Y bueno, vamos poniendo la *jeta* [cara] en el barrio. (...) Y después, esa propuesta quedó en el aire, nunca salió... se diluyó. (...) Realmente, yo pasé una vida entera construyendo credibilidad como militante para que este programa la venga a hacer mierda. (Mónica, militante del *Fren-*

²⁹ En parte, esto sucedía porque, como mencionamos en la sección anterior, los promotores no contaban con recursos propios para responder a las demandas surgidas de los diagnósticos participativos.

te Transversal Nacional y Popular, facilitadora provincial del PTSC, entrevista con la autora, 12-08-2008)

Lo importante, en términos de nuestro foco analítico, es que en estas situaciones los agentes estatales se volvían, a pesar de sus disputas intraburocráticas, expresiones indiferenciadas del Ministerio. El caso de los militantes no era una excepción.

A modo de conclusión

Los estudios sobre las relaciones entre movimientos sociales y el Estado suelen estar enmarcados por el supuesto de que existe una diferencia sustantiva entre las prácticas que los caracterizan. Correlativa de una matriz teórica dualista, que entiende al “Estado” en oposición a la “sociedad”, este supuesto impide considerar las mediaciones que existen entre estos ámbitos y los modos en que las mismas configuran el funcionamiento corriente de las instituciones políticas. Explorar estas mediaciones no implica, sin embargo, asumir el supuesto contrario, donde los mecanismos de diferenciación institucional serían irrelevantes para la vida política. Por el contrario, es precisamente desde allí que dichos mecanismos pueden ser observados y documentados en sus ambivalencias y eficacias. El caso que aquí hemos desarrollado se ha presentado como una oportunidad excepcional para poner a prueba la fecundidad analítica que pudiera tener esta aproximación. Situados al “interior” de una burocracia estatal, nuestro análisis ha partido de las perspectivas y prácticas de un grupo de agentes —militantes de organizaciones de desocupados— cuya posición se construye, en la micropolítica del Ministerio indagado, como el extremo “menos estatal” del Estado. Es en ese extremo, a nuestro juicio, donde con mayor nitidez puede observarse la especificidad de la autoridad estatal y sus mecanismos reproductivos.

Hemos visto que la narrativa que significa el ingreso de los militantes al aparato del Estado *reconoce*, por un lado, el trabajo social y político realizado por los movimientos sociales en la década de 1990 y les asigna, por otro lado, una *misión institucional*: conectar centro y territorio. Mostramos, a su vez, que esta narrativa no es el contenido explícito de una doctrina, sino que se encuentra imbricada en el entramado de relaciones micropolíticas del MDSN. Las cualidades que los militantes reivindican como fundamentos de su legitimidad —el particularismo colectivo, la mística militante y el saber territorial— los delimitan como un grupo diferenciado capaz, por eso mismo, de ser reconocidos y de llevar a cabo la misión que se les encomienda. Pero

para ello, no deben ser transformados por el Estado, no deben ser su expresión indiferenciada. De este modo, mostramos el carácter lábil, elusivo, de la frontera estatal.

Sin embargo, en un segundo momento del análisis, mostramos que el ejercicio de la autoridad institucional del Estado resignifica las prácticas y relaciones en las cuales los militantes emergen como grupo. En las interacciones que mantienen con sus pares de militancia y/o con los destinatarios de la asistencia, aquellos atributos que los delimitaban como un “actor estatal” transformador son mediados por las tareas propias de la gestión pública: transmitir y exigir el cumplimiento de procedimientos legales, responder por la ineficiencia en la asignación de recursos, ejercer una mirada sistémica que no siempre es compatible con las particularidades de las realidades locales. Tareas para las cuales no han sido formados. Más aún, para las cuales harían falta unas destrezas que aparecen como propias de sus contra-grupos. La “lógica” de la burocracia asistencial media, en dichas circunstancias, el significado de las prácticas de los militantes.

¿Qué dice este proceso sobre la especificidad de la autoridad estatal? Según Bourdieu (1994:10), el poder de nominación es la base de la autoridad de los portadores del poder estatal. La capacidad de imponer operaciones de codificación que homogenizan las formas de comunicación e instituyen principios de visión y división social comunes, hace del Estado un banco de capital simbólico. En el espacio estatal que hemos indagado, sin embargo, los agentes reivindican principios de autoridad asociados no sólo, ni principalmente, a este poder de nominación, sino a las cualidades que los hacen “militantes de base”. Más aún, esos principios se esgrimen en *contra* de los atributos que serían propios del “burócrata estatal”: el trabajo de universalización, la pretensión de neutralidad, el saber de escritorio. En especial en las áreas asistenciales del Estado argentino, donde prima una lógica de acción coyuntural y la inestabilidad de los planteles estatales, el contenido y forma de la autoridad estatal es lógicamente disputable. De allí que no pueda darse por sentada, como la manifestación de una “función” normativamente atribuida. A pesar de que en ocasiones las investigaciones empíricas refieran al “Estado” como una unidad consolidada y monolítica, su carácter heterogéneo, contradictorio y procesal es un punto bien establecido en las ciencias sociales.

¿Quiere esto decir que los contenidos prácticos de la autoridad estatal son sólo determinables por aquellos que circunstancialmente la personifican? Creemos haber mostrado que no. Entendemos que una perspectiva que observe al Estado como una realidad enteramente situacional es tan incapaz de capturar su carácter práctico como aquella que lo reifica como una entidad discreta y ya constituida. Actuar “en nombre del Estado” implica disputarlo,

pero también ser disputado por ciertos mecanismos de poder sedimentados históricamente y autónomos, en cierta medida, de los grupos de actores que lo personifican. En los procesos analizados, implica homogeneizar el lenguaje de las prácticas asistenciales a los términos jurídico-administrativos que hacen que las “demandas de asistencia” puedan ser mostradas y demostradas “a la distancia”, que puedan entrar en el “circuito”. Y es en ese punto que la formulación de Bourdieu resulta útil, con la salvedad de que el ejercicio del poder de nominación no es siempre redituable, y que detentar el capital estatal puede tensionar la legitimidad que proviene, justamente, de prácticas de confrontación con los poderes oficiales.

De allí que la pregunta por los mecanismos de diferenciación de la autoridad estatal no deba confundirse con la pregunta por su legitimidad. Tampoco reducirse al problema de la cohesión organizacional de las burocracias. Burocracias perfectamente fragmentadas, como la del MDSN, pueden ser sin embargo mediadas, y en cierto sentido unificadas, por el “efecto Estado”. Volviendo, entonces, a los interrogantes teóricos planteados al comienzo, lo que revela la mediación recíproca entre la investidura estatal y la identidad de los militantes es tanto la *inestabilidad* como la *eficacia* de la frontera estatal. Como vimos, dicha frontera no discrimina unidades discretas, sino que es más bien una línea trazada internamente, dentro de la red de mecanismos institucionales a través de los cuales el orden burocrático-legal se reproduce. Su eficacia, paradójicamente, no se presenta en la forma del “éxito” de las políticas o regulaciones implementadas, sino en las quejas y malestares que las rodean, y que se dirigen hacia aquellos que personifican, aún circunstancialmente, al Estado. Las implicancias de este tipo de mecanismos para la reflexión en torno a la autonomía de los movimientos sociales no deberían ser descuidadas.

Recibido: abril, 2010

Revisado: octubre, 2010

Correspondencia: Paraná 145, 5º piso/(C1017AAC)/Buenos Aires, Argentina/
teléfono-fax: (54)-11-4374-7007/5115/correo electrónico: luisina.perel-
miter@gmail.com

Bibliografía

Álvarez Leguizamón, Sonia (2005), “La invención del desarrollo social en Argentina. Historia de ‘opciones preferenciales por los pobres’”, en L. Andrenacci (comp.),

- Problemas de política social en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, UNGS-Prometeo, pp. 81-124.
- Álvarez, Sonia y Raphael Hoetmer (2009), *Repensar la política desde América Latina: Cultura, Estado y Movimientos Sociales*, Lima, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Andrenacci, Luciano y Fernando Falappa (2009), *La política social de la Argentina democrática (1983-2008)*, Los Polvorines y Buenos Aires, UNGS-Biblioteca Nacional.
- Andrenacci, Luciano, Lidia Ikei, Elina Mecle y Alejandro Corvalán (2005), “La Argentina de pie y en paz: acerca del Plan Jefes y Jefas de Hogar de Desocupados y del modelo de política social de la Argentina contemporánea”, en L. Andrenacci (comp.), *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo, pp. 181-211.
- Biglieri, Paula y Gloria Perelló (2007), *En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*, Buenos Aires, UNSAM Edita.
- Bourdieu, Pierre (1994), “Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field”, *Sociological Theory*, vol. 12, núm. 1, 1994, pp. 1-18.
- Cortés, Martín (2009), “Movimientos sociales y Estado en el kirchnerismo. Tradición, autonomía y conflicto”, *Primer Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales*, Buenos Aires, 30 y 31 de marzo de 2009, CD-ROM.
- Delamata, Gabriela (2004), *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*, Buenos Aires, EUDEBA.
- Etchemendy, Sebastián y Candelaria Garay (en prensa), “Between Moderation and Defiance: Argentina’s Left Populism in Comparative Perspective (2003-2008)”, en S. Levitsky y K. Roberts (eds.), *Latin America’s Left Turn: Causes and Implications*, Cambridge University Press.
- Fornillo, Bruno (2008), “Derivas de la matriz nacional-popular: el pasaje de la movilización a la estatalización del movimiento Barrios de Pie durante la presidencia de Néstor Kirchner (2001-2007)”, en S. Pereyra, G. Pérez y F. Schuster (eds.), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*, La Plata, Ediciones Al Margen.
- Frederic, Sabina (2004), *Buenos Vecinos, Malos Políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires*, Buenos Aires, Prometeo.
- Freytes Frey, Ada y Cecilia Cross (2007), “Movimientos Piqueteros: alcances de su construcción política”, *Revista Política y Cultura*, núm. 27, UAM-Xochimilco, pp. 121-141.
- Garay, Candelaria (2007), “Social Policy and Collective Action: Unemployed Workers, Community Associations, and Protest in Argentina”, *Politics & Society*, vol. 35, núm. 2, pp. 301-328.
- Glasser, Barney y Anselm Strauss (1967), *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*, Chicago, Aldine.
- Gómez, Marcelo (2006), “Crisis y recomposición de la respuesta estatal a la acción

- colectiva desafiante en la Argentina (1989-2004)", *Revista Argentina de Sociología*, vol. 4, núm. 6, pp. 88-128.
- Grassi, Estela (2003), *Política y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame*, Buenos Aires, Espacio Editorial.
- Gupta, Akhil (1995), "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State", *American Ethnologist*, vol. 22, núm. 2, pp. 375-402.
- Haney, Lynne (2002), *Inventing the Needy: Gender and the Politics of Welfare in Hungary*, Berkeley, University of California Press.
- Landau, Matías (2008), *Política y participación ciudadana*, Buenos Aires, Miño y Dávila.
- Latour, Bruno (2008), *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*, Buenos Aires, Manantial.
- Lo Vuolo, Rubén y Alberto Barbeito (1998), *La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al neoconservador*, Buenos Aires-Madrid, Miño y Dávila-CIEPP.
- Migdal, Joel (2001), *State in Society. Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mitchell, Timothy (1999), "Society, Economy and the State Effect", en G. Steinmetz (ed.), *State/Culture. State Formation after the Cultural Turn*, Nueva York, Cornell University Press, pp. 76-97.
- Natalucci, Ana (2010), "Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento Barrios de Pie, 2002-2008", *Laboratorio*, año XI, núm. 23. http://laboratorio.fsoc.uba.ar/textos/lavbo23_5.pdf, última consulta 16 de abril de 2010.
- Perelmiter, Luisina (en prensa), "Saber asistir: técnica, política y sentimientos en la asistencia estatal. Argentina (2003-2008)", en G. Vommaro y S. Morresi (comps.), *Política y expertise en la Argentina reciente*, Buenos Aires, Prometeo.
- Perelmiter, Luisina (2007), "¿Es posible la debilidad estatal? Notas de investigación sobre la construcción del Estado en política social", *Papeles de Trabajo*, Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de General San Martín, año 1, núm. 2, IDAES. <http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo>, última consulta 16 de abril de 2010.
- Pereyra, Sebastián, Germán Pérez y Federico Schuster (comps.) (2008), *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*, La Plata, Al Margen.
- Rose, Niklas (1996), "The death of the social? Re-figuring the territory of government", *Economy and Society*, vol. 25, núm. 3, pp. 327-356.
- Schuster, Federico y Sebastián Pereyra (2001), "La protesta social en la Argentina democrática", en N. Giarraca y K. Bidaseca (eds.), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza Editorial.
- Schuster, Federico, Gabriel Nardacchione, Sebastián Pereyra y Federico Naishtat

- (comps.) (2005), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo.
- Scott, James (1998), *Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven, Yale University Press.
- Soprano, Germán (2008), “Del Estado en singular al Estado en plural. Contribución para una historia social de las agencias estatales en la Argentina”, *Cuestiones de Sociología*, núm. 4, pp. 19-48.
- Steinmetz, George (1999), “Introduction: Culture and the State”, en G. Steinmetz (ed.), *State/Culture. State Formation after the Cultural Turn*, Nueva York, Cornell University Press, pp. 1-49.
- Svampa, Maristella (2008), *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2003), *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos.
- Vilas, Carlos (1997), “De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo”, *Desarrollo Económico*, vol. 36, núm. 144, pp. 931-952.
- Wilks, Ariel (2009), “El desinterés como regulación social: a propósito de las prácticas de ‘militantes’, ‘voluntarias’ y ‘manzaneras’”, *Estudios de Antropología Social*, núm. 2.

Fuentes mencionadas

- Decreto de la Administración Pública Nacional 551/2006, Argentina.
- Resolución Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 1573/2006, Argentina.
- Diario *Clarín*, 25-03-2008 y 02-12-2009.
- Diario *La Nación*, 16-03-2006, 22-03-2006, 6-06-2008 y 17-12-2009.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Sección Condiciones de Vida, Línea de Pobreza y Canasta Básica, Serie Histórica. <http://www.indec.mecon.ar/>, última consulta 16 de abril de 2010.
- MDSN (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) (2009), *Rendimos Cuentas*, mayo 2007-Diciembre 2009, Argentina. http://www.desarrollosocial.gov.ar/pdf/RC_2009.pdf, última consulta 16 de abril de 2010.
- MDSN (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) (2007), *La Bisagra. Políticas Sociales en Acción (2003-2007, Argentina)*. <http://www.desarrollosocial.gov.ar/labisagra/default.asp>, última consulta 16 de abril de 2010.
- Patria Grande*, Periódico del Movimiento Libres del Sur, núm. 30, 10-12-2008.

Acerca de la autora

Luisina Perelmiter es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

y Doctoranda visitante en Northwestern University. Sus campos de interés son la sociología del Estado, las burocracias estatales y la política social. Ha publicado, “¿Es posible la debilidad estatal? Notas de investigación sobre la construcción del Estado en política social”, *Papeles de Trabajo*, 1, N° 2, IDAES-UNSAM, 2007, y “Saber asistir: técnica, política y sentimientos en la asistencia estatal”, en G. Vommaro y S. Morresi (comps.), *Política y expertise en la Argentina reciente*, Buenos Aires, Prometeo (en prensa).